

Soros controla a 12 de los 100 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

ABC [abc.es/internacional/abci-soros-controla-12-100-jueces-tribunal-europeo-derechos-humanos-202002230205_noticia.html](https://www.abc.es/internacional/abci-soros-controla-12-100-jueces-tribunal-europeo-derechos-humanos-202002230205_noticia.html)

23 de febrero de 2020

De los cien jueces que formaron parte del **Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo**, entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de octubre de 2019, veintidós tienen –o tuvieron– vínculos con siete ONGs de corte progresista acreditadas ante él, y doce de ellos con la **Open Society Foundation (OSF) y su rama jurídica, The Open Society Justice Initiative (OSJI)**, fundadas y controladas por el polémico magnate norteamericano de origen húngaro **George Soros**. Se trata, entre miembros actuales, del búlgaro Yonko Grozev, del lituano Egidijus Kuris, del albanés Darian Pavli, de la croata Ksenija Turkovic y del letón Martins Mits; entre los eméritos figuran el polaco Lech Garlicki, la estonia Julia Laffranque, la bosnia Lilijana Mijovic, el húngaro András Sajó, el eslovaco Jan Sikuta, el montenegrino Nebojsa Vucinic y la letona Ineta Ziemle.

Así se desprende de la investigación llevada a cabo por el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ), también acreditado ante el TEDH, al que ha tenido acceso ABC.

Llama la atención la procedencia geográfica de los jueces concernidos: todos proceden de países bálticos o balcánicos que recobraron la libertad tras la caída del Muro de Berlín, elegidos como terreno de cultivo prioritario por la OSF para arraigar sus ideas progresistas: esa zona se lleva la mayor parte de los 90 millones de dólares que la OSF destina anualmente a Europa. Según el informe, Soros ha invertido más de 131 millones de dólares en Albania desde 1992, sirviendo parte de ese dinero para la captación y posterior formación de élites. Y en lo tocante a la selección de jueces para el TEDH, el método demostró su eficacia, pues en 2018 dos de los tres candidatos para ocupar el puesto de Estrasburgo habían sido previamente directivos de la sucursal local de la OSF, siendo Pavli el designado.

La **Fundación Soros** –otra de las entidades de la nebulosa del magnate– repitió la operación en Letonia, donde creó y financió la Escuela Superior de Derecho de Riga, entre cuyos colaboradores permanentes figuraron los jueces Ziemle y Mits. También llama la atención, aunque no es ni haya sido juez del TEDH, de **Nils Muiznieks**, director de programas de la OSF en Letonia hasta 2012, año en el que tomó posesión del estratégico cargo de Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que ejerció hasta 2018, distinguiéndose por sus constantes críticas al primer ministro húngaro Viktor Orban, diana predilecta de las campañas de Soros en Europa. Y en 2009, Muiznieks declaró abiertamente que uno de los objetivos de la OSF era el de «crear un homo sorosensus, el de la sociedad abierta, en oposición al homo sovieticus».

Los seis escuderos

El informe del ECLJ no limita su investigación a los grupos directamente controlados por George Soros. También escudriña –aunque su influencia es notablemente menor– la actividad de otras seis ONGs presentes en el Tribunal de Estrasburgo: la británica The Aire Centre, la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, Interights, los Comités Helsinki y Amnistía Internacional. Todas cooperan estrechamente con el entramado de Soros. En el caso de los Comités Helsinki y de Amnistía Internacional llama la atención su deriva izquierdista: durante la Guerra Fría, los Comités Helsinki destacaron por su defensa de los disidentes encarcelados en los países de Europa Oriental; Amnistía Internacional se ciñó durante casi seis décadas a una defensa de los Derechos Humanos no contaminada ideológicamente. Hasta que en 2007, reconoció el aborto como un derecho, decisión que supuso la ruptura de su colaboración con la Santa Sede.

Los 90 millones de dólares que Soros ha invertido en el país báltico entre 1992 y 2014 han sido, como se puede constatar, muy productivos. En relación con Bulgaria, el informe no ofrece datos dinerarios, pero sí demuestra la estrecha relación existente entre los dos últimos jueces búlgaros del TEDH y ONGs cuyo mecenas principal es Soros a través de sus múltiples palancas.

El informe señala que los jueces Turkovic –antiguo administrador e investigador de OSF en Croacia– y Sikuta –antiguo miembro del Comité de Expertos de OSF en Eslovaquia– **intervinieron en un caso en que OSF actuaba como tercero**; en dos Laffranque –ex miembro del comité ejecutivo de Praxis, entidad financiada por OSF, Ziemle –docente en la Escuela Superior de Derecho de Riga– y Garlicki, que ha impartido clases en diversos programas académicos de OSF y de la «Central Europe University», otro de los pilares de Soros en Europa; en tres intervinieron Sajó –antiguo empleado de la oficina central de la OSJI– y Vucinic –colaborador de los informes de OSF en 2005 y 2008; y en cuatro Mijovic, muy activa en el comité ejecutivo de OSF en Bosnia entre 2001 y 2004. Tampoco deja de asombrar que el juez Grozev, exadministrador de la OSF en Bulgaria y antiguo empleado de la OSJI en Nueva York fuera elegido juez del TEDH poco después de haber defendido a las Pussy Riots ante ese mismo tribunal y sin que hubiera culminado el procedimiento. «No tomó parte en el juicio, pero el Tedh condenó a Rusia a pagarle 11.760 euros a modo de minuta», señala a ABC Grégor Puppinck, director del ECLJ.

Choque de intereses

Las intervenciones –aunque el fallo final no sea favorable a las pretensiones de OSF y entidades satélites– de estos jueces ponen de manifiesto la existencia de un **claro escenario de conflicto de intereses en el seno del TEDH**, cuyo reglamento, en el artículo 28, se limita a recomendar la inhibición de un juez, «en caso de que su imparcialidad esté en entredicho en el examen de un caso concreto». El informe solo percibe trece inhibiciones de jueces en los más de trescientos casos en los que las OSJ, la OSJI y otras ONGs con las que comparte simbiosis ideológica han participado, ya sea como demandantes o como terceros, entre 2009 y 2019. Se dan asimismo situaciones sorprendentes: en el «caso D.H. y otros contra República Checa», fechado en 2007, el abogado de los demandantes era el propio presidente de la OSJI, sin que esta condición figurase en el sumario, pese que la OSJI la reivindicó en su relación de actividades.

Curioso también que en el caso «Big Brother contra Reino Unido», que versaba sobre el delicado asunto de la protección de datos, diez de los demandantes eran ONGs financiadas por la OSF. Otra muestra de la estrecha relación entre Soros y los juristas que operan en los tribunales internacionales de derechos humanos –no solo en el TEDH– viene dada por la publicación, de forma conjunta por la OSJI y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) fue la de una guía dedicada a las reglas y prácticas de la selección de jueces y comisarios de derechos humanos a lo largo y ancho del planeta.

Volviendo al TEDH, conviene recordar que entre sus competencias, contempladas en el Preámbulo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, figura la protección y el desarrollo de los derechos y libertades del Convenio. En los últimos es evidente que los jueces del TEDH han potenciado esta facultad, siendo la principal consecuencia el aumento de su influencia política. España lo comprobó cuando el TEDH tumbó la **«Doctrina Parot»**, fallo que supuso la liberación inmediata de decenas de etarras. Precisamente, fue la CIJ la que remitió al TEDH, en marzo de 2013, el informe contrario a esa doctrina y la primera en aplaudir el fallo siete meses después. Su hombre en España es el antiguo magistrado del Tribunal Supremo y expresidente de la Unión Progresista de Fiscales, José Antonio Martín Pallín.

El Tribunal de Estrasburgo interviene con cada vez mayor frecuencia en asuntos tocantes a los **intereses de grupos homosexuales o de defensores del aborto** y a los derechos de las minorías étnicas, teniendo sus fallos capacidad de desestabilización social y política, por ejemplo mediante la modificación obligatoria de leyes aprobadas democráticamente por los respectivos parlamentos. Y este ámbito de los derechos individuales es uno de los favoritos de las entidades vinculadas a Soros presentes en el TEDH. Y su influencia no se mide tanto en el número de victorias judiciales como en el hecho de haber logrado que el TEDH adopte su sesgo progresista en la interpretación de los Derechos Humanos, lo que permite, el informe del ECLJ es elocuente al respecto, una sincronización de acciones en la puesta en marcha de campañas para sensibilizar a la opinión pública europea y arrastrarla hacia sus posiciones. Medios a Soros no le faltan. E insuficiencia de medios al TEDH tampoco: su presupuesto anual, 70 millones de euros, es inferior en 20 millones a la cantidad que el magnate gasta cada año en Europa.

La magistrada española en el punto de mira

Los efectos de la colonización ideológica en la que las organizaciones vinculadas a Soros han jugado un papel importante también se hacen sentir en la política: en enero de 2018, los socialistas europeos pidieron públicamente la anulación del nombramiento –uno de los últimos importantes del Gobierno de Mariano Rajoy– de la jurista donostiarra María Elósegui como juez española del Tedh por su postura contraria al matrimonio homosexual. Fracasaron en su intento, pero nunca antes un grupo político había osado formular una petición de tanto calibre.